

4

Los generales dicen «okey»

La situación no era buena para Allende porque, mientras él viajaba por diversos países, en Washington, el Latinamerican Desk del Pentágono analizaba lo sucedido durante el paro del mes de octubre, y llegaba a la conclusión de que era necesario planificar, antes de que fuera tarde, «en cooperación con las Fuerzas Armadas chilenas» el derrocamiento de Allende. El Pentágono, a partir de la experiencia de octubre, había llegado a la conclusión que «la insurrección popular en Chile está en el punto de despegue» y hay que impedirle hacerlo. Del mismo modo, estimó que Salvador Allende «ya no estaba en posición de controlar la insurrección popular» y, por eso mismo, resultaba inocuo no contribuir a derrocarlo y reemplazarlo por un régimen duro, de fuerza, que desarticulara la organización de los trabajadores a fin de prevenir el peligro subversivo «desde abajo».

Durante los catorce días que Allende estuvo fuera de Chile, en Washington, los generales del Pentágono, sin consultar o informar a Nixon, su Presidente, decidieron dar «luz verde» para que los generales chilenos intentaran derrocar a Allende de una manera eficaz, drástica y segura.

Quando en noviembre de 1972 Salvador Allende fue recibido por el general Carlos Prats, Vicepresidente de la República, y le hizo entrega del mando de la nación, ya estaban en la capital los emisarios del Pentágono para iniciar las conversaciones con los generales chilenos dispuestos a intentar la gran aventura militar. Y en esa aventura, por decisión del Pentágono, debía quedar fuera Carlos Prats González. De tal modo que ni Prats ni Allende sabían, el 19 de noviembre de 1972, que los días del Gobierno constitucional estaban contados, y los habían contado en inglés.

Y el asunto no era como para tomarlo en broma. El informe *Octubre en Chile* preparado por el Latinamerican Desk, había sido puesto en la mesa del presidente del cuerpo de generales responsables de divisiones administrativas en el Pentágono, el almirante Thomas Moorer. Y el señor almirante había dado su aprobación a las «conclusiones» del informe.¹

Y los hombres del Pentágono en la Embajada de los Estados Unidos en Chile conocedores en detalle de la situación de las Fuerzas Armadas chilenas, al revés que la CIA que siempre tuvo una sorprendente ignorancia sobre el pensamiento de los altos mandos militares chilenos (lo cual la hizo cometer errores graves tanto en su complot de septiembre-octubre de 1970 como en el de octubre de 1972), se conectaron con «los hombres precisos».

Ya en noviembre de 1972, los enviados del Pentágono hablaban con el general Gustavo Leigh Guzmán, segundo hombre de la Fuerza Aérea; con el vicealmirante José Toribio Merino, segundo hombre de la Marina; con los generales «reformistas» Washington Carrasco, Herman Brady y Sergio Arellano Stark; con los generales «duros» Manuel Torres de la Cruz y Óscar Bonilla; y con el general «constitucionalista» Héctor Bravo Muñoz. Les dijeron escuetamente: Hay que prepararse para derribar a Allende y reemplazarlo por un Gobierno duro, fuerte, que haga trizas la estructura de poder naciente de los trabajadores. Es una carrera contra el tiempo. Se trata de «nuestra supervivencia». Si «el populacho tiene vía libre para seguir el camino de octubre, en un año o dos nos arrollará». Y los enviados del Pentágono establecieron un razonamiento que se esparció, más tarde, como reguero de pólvora por las filas de los altos mandos chilenos. El razonamiento, aproximadamente, era así:

Los informes de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. demuestran que el Perú se está pre-

parando para una guerra con Chile y recuperar las provincias perdidas en la guerra del siglo pasado. De fuentes fidedignas sabemos que los generales peruanos se están armando con blindados pesados y harán compras en la Unión Soviética (por supuesto, los enviados del Pentágono no contaron a los generales chilenos que ellos habían planificado suspender las ventas de armas al Perú, precisamente para obligar a los gobernantes peruanos a reponer su parque en el mercado de la Unión Soviética, y tener así «excusa estratégica» para iniciar una campaña contra el Perú, una vez resuelto el problema chileno). También sabemos que el Perú cuenta con una división aerotransportada para su ataque a Chile, y ha construido una carretera central, muy amplia, de norte a sur, que llega al límite con Chile. El Perú atacará en uno o dos años más, tal vez tres, aprovechándose del momento en que la economía chilena esté destruida por el marxismo. Chile no es la Unión Soviética de 1917, no podrá resistir ese ataque y será vencido. Nuestros cálculos nos señalan eso. Solamente una alianza con Brasil podrá detener «los afanes revanchistas» de los peruanos. Pero el Gobierno brasileño nos ha informado que apoyará a Chile solamente si hay un Gobierno de confianza. Nunca apoyará al actual. La situación es simple: la supervivencia de Chile como nación no sólo está amenazada por el marxismo que quiere conquistarlo totalmente para que sirva de base a la Unión Soviética contra los Estados Unidos y «todo el mundo civilizado», sino también por los enemigos externos que quieren desmembrar su territorio y recuperar las ricas tierras minerales del extremo norte. Perú recibiría el apoyo de Argentina, nosotros (el Pentágono) podríamos sujetar a Bolivia (no sabemos por cuanto tiempo), pero con el Gobierno de Allende funcionando, las Fuerzas Armadas chilenas serían derrotadas. Ustedes (los generales chilenos) comprenderán la responsabilidad que se echan encima al enterarse de estos hechos.

El «informe» del Pentágono fue como un narcótico para muchos generales. Era la «justificación» para participar en la trama para el derrocamiento de Allende. Estados Unidos les había dado una justificación «patriótica» para inclinarlos al lado que temían: de destruir la democracia burguesa chilena. Muy pocos generales pusieron en duda el informe del Pentágono. Entre esos pocos, estaba el general Carlos Prats González, comandante en jefe. La palabra que utilizó para definirlo fue «grotesco».

Pero el general Carlos Prats, en verdad, ya no importaba nada. Después de haberse unido estrechamente, a partir de noviembre, los generales «reformistas» y «duros», existía una mayoría sustancial a favor del derrocamiento de Allende. Por lo demás, la ayuda ofrecida por el Pentágono y su anuncio de que el Gobierno brasileño también estaría a su lado, daba mayores ímpetus a la idea de reemplazar el Gobierno civil por uno militar, «sin plazo fijo de término».

Los generales chilenos, en la reunión final con los enviados del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, hicieron una contraproposición que fue aceptada. Dijeron que darían de plazo a «los organismos constitucionales» chilenos para que derrocaran a Allende hasta marzo de 1973. Si en esa fecha los partidos demócratacristiano y nacional no eran capaces de sacar dos tercios de parlamentarios para destituir al Presidente por simple mandato del Congreso, entonces se prepararían rápidamente para dar un golpe militar eficaz, drástico y masivo.

La maquinaria quedó alineada en su punto de partida.

El fracaso político

En enero de 1973, en la ciudad de Viña del Mar, se reunió la directiva ampliada de la Sociedad de Fomento Fabril. El tema de discusión era obvio: un resumen de la fracasada campaña del año anterior para derrocar al Gobierno constitucional. Se leyó un resumen hecho por las autoridades oficiales del Gobierno, en noviembre de 1972, sobre los efectos materiales del «paro de octubre»:

«El paro patronal de octubre perseguía la caída del Gobierno Popular y en esto fracasó rotundamente. Pero en lo que logró golpear al país fue en sus objetivos económicos. Provocar un desbarajuste en los transportes, en la circulación y en la distribución de los productos de consumo, de las materias primas y combustibles. Pese al esfuerzo de los obreros que mantuvieron en funcionamiento las industrias, pese al empeño de la juventud que suplió con su trabajo voluntario la carga, descarga y movilización de los productos, pese a la protección de las Fuerzas Armadas, el enemigo logró inferir serios e irreparables daños a la economía nacional, a la producción presente y futura.

»Durante los 26 días del paro patronal se perdieron impor-

tantes volúmenes de productos percederos, entre ellos más de 10 millones de litros de leche que no pudieron llegar a las plantas. Hubo que sacrificar miles de cerdos y aves que no alcanzaron a recibir el alimento. El no traslado oportuno de las semillas, de los fertilizantes, implicó que habrá bajas de siembras y de los rendimientos que podrían haberse logrado en numerosos cultivos. Gran cantidad de industrias, aunque no se paralizaron, debieron disminuir su producción para no agotar sus existencias de materias primas. Las fundiciones de Paipote, Potrerillos, Ventanas y Chagres dejaron de producir más de 5.000 toneladas de cobre porque se interrumpió el transporte de concentrado desde los grandes yacimientos mineros. A otras fábricas les afectó la disponibilidad de combustible. Se atrasaron muchos proyectos de construcción e inversión. Quedaron postergadas reparaciones urgentes porque no llegaron a tiempo elementos, piezas o equipos indispensables. Todo ello condujo a la baja apreciable en la producción de octubre lo que repercutirá en el índice del año y de los próximos meses.

»Desde el punto de vista financiero, el Gobierno experimentó la pérdida de los ingresos de las plazas de peaje; se dejaron de percibir los impuestos de la compraventa —la más importante de las recaudaciones tributarias— y se mermaron considerablemente otras fuentes impositivas. Ello significó nuevos déficit financieros y emisiones monetarias adicionales para evitar males mayores.

»Con todo, la reacción no se la pudo. Se mostró más grande la fuerza del proletariado, de la aplastante mayoría de los campesinos, de la juventud, las mujeres, los sectores patriotas de la pequeña y mediana industria, el comercio y los transportes que desafiaron las amenazas de los golpistas. El pueblo consciente y organizado, comprobó su capacidad para sostener la vida del país en las más difíciles condiciones.

»La lección de octubre es que la reacción, con todos los inmensos recursos y el respaldo de la conspiración internacional, puede ser derrotada.»

Los asistentes a la reunión de la oligarquía industrial en Viña del Mar estuvieron de acuerdo en que este breve informe del Gobierno era correcto: se había herido gravemente a la economía nacional, pero no a la voluntad de combate de los obreros, campesinos, empleados y demás sectores que apoyaban el Programa de la Unidad Popular. Se había puesto la producción nacional al borde del colapso, pero el Gobierno de

Allende seguía en pie y en aparentes mejores condiciones que antes. Se había conseguido que las Fuerzas Armadas no actuaran con decisión en favor del Gobierno; pero, al final de los 26 días críticos, frente a la atemorizante movilización del pueblo, había aparecido integrando el Gabinete del presidente Allende, como Vicepresidente de la República, un general.

Sin embargo, también estuvieron de acuerdo en que había que seguir en el empeño de botar a Allende. Durante el paro de octubre, solamente en los 26 días que duró, habían gastado los oligarcas industriales más de 100 millones de dólares en pagos a gentes en huelga. Ese dinero provenía, en gran parte, de sectores industriales brasileños, argentinos y venezolanos. Y esa gente quería resultados, no excusas.

Examinando la situación con mayor precisión, los oligarcas industriales notaron que el alza del costo de la vida en diciembre de 1972, había terminado con un 99,5 %, record de inflación para Chile, y que el aparato productivo estaba tan deteriorado en octubre, que la escalada de la escasez de alimentos y productos esenciales era tremenda y las colas para conseguirlo duraban días enteros en diversos barrios de la capital. En suma, se podría predecir que durante los meses de enero y febrero de 1973 habría una estampida inflacionaria, un deterioro considerable de las condiciones de vida y, por lo tanto, una capacidad de «influir favorablemente en la opinión pública para que vote en contra del Gobierno en las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973».

Se acordó entonces pedir apoyo, principalmente, a empresas multinacionales de los Estados Unidos y a las asociaciones industriales de Brasil, con ello se pretendía formar una «caja electoral» para los candidatos a parlamentarios de la Democracia Cristiana, Partido Nacional, Democracia Radical y otros grupúsculos de derecha. La caja resultó enorme. En sólo siete días, entre el sábado 17 y el viernes 23 de febrero de 1973, el candidato a senador por Santiago, Eduardo Frei Montalva, gastó en propaganda de diarios, revistas, afiches, folletos, televisión, radio y movilización callejera, dos millones de dólares.

La Sociedad de Fomento Fabril creía, en enero de 1973, que con esas condiciones de deterioro económico, jamás vistas en Chile hasta entonces, los candidatos de la reacción llenarían los dos tercios de los escaños parlamentarios. De esta forma, cuando el 21 de mayo siguiente comenzara a funcionar el nuevo Parlamento, Allende podría ser destituido constitucionalmente.

Sin embargo, a pesar de haberse fijado esa estrategia a corto plazo, en la reunión de Viña del Mar se previó una alternativa. La alternativa de que «la UP saque más de 40 % de los votos». Si esto ocurría, «aunque parece muy remoto», «nuestra única salida es la guerra civil». De modo que al finalizar su reunión en Viña del Mar, la oligarquía industrial chilena acordó, al mismo tiempo que poner todas sus fuerzas al servicio de la campaña electoral, no dejar en ningún instante de alimentar a los grupos fascistas Patria y Libertad, Comando de Ex Cadetes, etc., para que siguieran cumpliendo con sus tareas de sabotaje y de infiltración en las Fuerzas Armadas.

La Sociedad de Fomento Fabril discutió con la Sociedad Nacional de Agricultura y con la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio y estuvieron de acuerdo, en general, con los mismos puntos.

Se desató la campaña electoral con el lema público por parte de los reaccionarios de «conseguir los dos tercios para destituir a Allende». El lema del candidato a senador nacional por Santiago, Onofre Jarpa, era: «No nos hace falta un nuevo Parlamento, sino un nuevo Gobierno».

Sin embargo, la campaña electoral, por parte de los partidos de derecha, se dio de tal modo, que pronto eran muchos los que daban cuenta que la elección misma era un mero pretexto. El diario de izquierda «Puro Chile», por ejemplo, durante todo el mes de febrero denunció en sus editoriales que «a la Sociedad de Fomento Fabril, a la Sociedad Nacional de Agricultura y a la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, no les interesa que sus políticos, como Frei y Jarpa, lleguen al senado para «legislar». Les interesa que lleguen para derrocar al Gobierno de Allende de alguna manera recubierta de «constitucionalidad». Así, en esencia, para la derecha en este país, la obtención de los dos tercios en el Parlamento es apenas un accidente. Se puede dar o no se puede dar. Si lo consiguen, destituirán a Allende después del 21 de mayo. Si no lo consiguen, llevarán adelante su complot para destituirlo de todas maneras, recurriendo a los altos mandos fascistas que en nuestras Fuerzas Armadas se han dejado engañar por sus cantos de sirena. El peligro del golpe comenzará en la misma noche del 4 de marzo. El imperialismo norteamericano ya ha dado orden a sus lacayos en Chile que derroquen al Gobierno constitucional de cualquier manera. Por eso, el pueblo tiene que estar alerta. No tiene que dejarse engañar con la idea de que «en las elecciones

se resuelve el problema del Poder». En las elecciones no se resuelve nada. El problema del Poder se resuelve preparándose para enfrentarse a los fascistas en su propio terreno y con sus propias armas. Claro, es cierto que hay que luchar para que el enemigo no saque los dos tercios en marzo. Pero eso es fácil conseguirlo. Se ve en la calle, en las poblaciones, en las fábricas y los asentamientos campesinos. Lo duro es lo otro. Y eso hay que conseguirlo. Organizar, los obreros como dirigentes, a los campesinos, empleados y demás sectores patriotas entre los pequeños y medianos empresarios, para formar un muro imbatible para la contrarrevolución fascista, y enseguida destruirla con sus propios métodos».

Este tipo de editorial en el diario «Puro Chile» causaba muchos problemas en el seno de la Unidad Popular (excepto en un sector importante del partido socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, donde había el mismo pensamiento que en el periódico), la cual, bajo el mando personal de Allende, y con el apoyo total de la directiva del partido comunista, había afrontado las elecciones parlamentarias de marzo como «la única» tarea de las organizaciones populares, que habían demostrado una enorme fuerza durante el paro empresarial de octubre de 1972. Basándose en esta línea general, se había dado una lucha muy fuerte por reemplazar las directivas de los cordones industriales, que estaban en manos de sectores avanzados del partido socialista, del MIR, del PCR y de partidos independientes de izquierda, por cuadros que siguieran la senda indicada por Salvador Allende y sus ministros comunistas: a «Hacer la revolución es producir».

Sin embargo, la idea de los cordones industriales era otra. Era la de formar «batallones de masas» para detener la contrarrevolución armada. Esto fue catalogado de «infantilismo de izquierda» por las publicaciones oficiales de la UP controladas por el Presidente y por los partidos que le acompañaban.

Para los redactores de diarios como «Puro Chile» el problema también estaba, además de consolidar el pensamiento de «prepararse para la lucha», en advertir al pueblo de que la conspiración fascista tenía hondas raíces en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, sin que esta denuncia significara el cierre del periódico por «injurias a las Fuerzas Armadas». Este hecho refleja cómo estaban atadas las manos de los izquierdistas en ese momento por todo el aparato «legalizante» del proceso que se desarrollaba en nuestra sociedad.

Para nadie fue una sorpresa los resultados de las elecciones parlamentarias. Dos o tres semanas antes del 4 de marzo, un informe de «sondeo de la opinión pública» realizado en Santiago, Valparaíso y Concepción para el grupo demócratacristiano de Eduardo Frei, indicaba que la Unidad Popular bordearía el 40 % de los votos. Es decir, estaba claro que la oposición no iba a sacar los dos tercios necesarios para destituir a Allende y reemplazarlo por el Presidente del Senado mientras se llamaba a nuevas elecciones presidenciales.

Los propios candidatos demócratacristianos y nacionales montaron la trampa psicológica en que cayeron. Públicamente hicieron toda su propaganda en el sentido de «sacar los dos tercios». Cuando en la noche del 4 de marzo estuvo claro que la Unidad Popular había sacado casi el 44 % de los votos, la masa reaccionó como si la combinación de partidos de Gobierno hubiera obtenido una «aplastante» victoria sobre las maniobras de la oligarquía y el imperialismo. En las propias palabras de Salvador Allende, la interpretación que se dio al resultado de las elecciones, por parte de la Unidad Popular, fue la siguiente, según el texto incluido más tarde en su Mensaje al Congreso del 21 de mayo de 1973:

«Las elecciones parlamentarias del 4 de marzo han demostrado algo que desespera a algunos de nuestros adversarios: el funcionamiento regular de los mecanismos político-institucionales a través de los cuales se expresa la voluntad popular. Contrariando los designios de quienes no han cesado en sus intentos de destruirlos, porque veían en las elecciones «una meta sin destino», la jornada del 4 de marzo fue clara manifestación de defensa del régimen democrático.

»Por otra parte, la significación del resultado electoral la da el contexto histórico en que ha tenido lugar. La política gubernamental se ha traducido en el apoyo masivo que han recibido los partidos políticos que lo sustentan, *el más alto que Gobierno alguno haya alcanzado en los últimos veinte años tras veintisiete meses de gestión*. El 4 de marzo ha sido reafirmada la vía chilena al socialismo.

»De ahí que, en la consulta nacional del 4 de marzo, se manifestara no sólo el respaldo al Gobierno, sino la reafirmación de una voluntad revolucionaria. Es algo más que un simple deseo de cambios. En una coyuntura económica tan desfavorable

como la que atravesamos, es la decisión popular de avanzar hacia el socialismo.»

El mismo día 5 de marzo, el siguiente de las elecciones, el entusiasmo de las masas recibe un balde de agua fría. En todos los cordones industriales, comandos comunales, consejos campesinos y juntas de abastecimientos y control de precios se habían organizado reuniones para «analizar el resultado electoral y dar un salto adelante en la formación del poder popular», bajo la forma general de «mejorar nuestra preparación para afrontar la contrarrevolución armada». Pero estas discusiones se hicieron inocuas porque no pudieron comenzar, ya que el propio presidente Allende y la directiva del partido comunista, iniciaron ese día una violentísima campaña contra «los ultraizquierdistas» que «objetivamente» le hacen el juego al imperialismo y a la oligarquía. Y se comenzó una campaña por volver por otro camino a la consigna de «Hacer la revolución es producir». Se lanzó la de «y ahora, a producir para la revolución».

Poco a poco, los ecos de octubre, que habían renacido en marzo, se fueron apagando para volver a la pugna entre los conceptos de si prepararse para la lucha contra el fascismo armado «es una provocación» o «es una acción revolucionaria». Y los días siguieron pasando sin que a la conspiración que se desarrollaba en el seno de las Fuerzas Armadas, con un gigantesco apoyo de las oligarquías de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela, además de la chilena, fuera tomada como un peligro real, y ante la cual no había otra defensa que la movilización de los trabajadores de manera correcta para esa condición objetiva.

Los generales, okey

A la semana siguiente de las elecciones, el grupo de generales en contacto directo con los emisarios del Pentágono, se reunieron varias veces para determinar sus próximos pasos. Una cuestión estaba clara: los políticos civiles habían fallado, no existía esperanza alguna de que Allende fuera destituido por las maniobras de los Frei, Jarpa y demás parlamentarios. Por eso mismo, había que cumplir con las órdenes del Pentágono: hacer el trabajo completo, a cara descubierta, y sin escudarse en los otros grupos de la oligarquía chilena y del imperialismo norteamericano.

En verdad, ya no había angustia en los generales y almirantes. Mientras los políticos se dedicaban en enero y febrero a su campaña electoral, los generales y almirantes se habían dedicado a «estudiar» y a «reflexionar». Habían echado un vistazo a la historia de Chile, en lo corrido del siglo, a la situación latinoamericana y mundial. Habían profundizado en la historia del movimiento obrero, del movimiento campesino y de los partidos de izquierda del país. Habían estudiado los problemas económicos y las crisis periódicas del sistema en la nación. Habían buscado luces... ¡y las encontraron! Fue en un folletito llamado «La Nueva República», que era sencillamente el programa presidencial del candidato derrotado en 1970, Jorge Alessandri Rodríguez. Los generales estaban de acuerdo con los planteamientos generales de esa «nueva República», producto del pensamiento del presidente más conservador que tuvo Chile en los últimos treinta y cinco años.

Las ideas principales escritas en «La Nueva República» eran éstas: «Sólo un gobierno autoritario», que imponga «orden», «disciplina» y «rechazo a la politiquería» podrá resolver los problemas de Chile.

«Se trata, entonces, de sustituir la lucha de clases divisionista por una vigorosa conciencia nacional, eminentemente unitaria y solidaria...

»El aporte del capital extranjero al desarrollo económico permite hacer crecer la inversión sin necesidad de postergar los beneficios sociales a una población que los necesita.

»La unidad, la solidaridad y la ulterior movilización de los chilenos serán posibles únicamente si son precedidas por un vigoroso renacer del espíritu nacional.»

Por ejemplo, «los jóvenes estudiarán más y marcharán menos».

«Son muchos los factores que conspiran contra la nacionalidad. El más importante es aportado por el marxismo internacional, representado en Chile por los partidos socialista y comunista».

Estas citas de La Nueva República eran buenas para los generales que habían dicho *okay* al Pentágono.

Pero no lo decían todo. No decían, por ejemplo, que los generales pensaban que el «desquiciamiento de nuestra sociedad» había comenzado a ser un factor grave no solamente desde 1970, con la inauguración del Gobierno de «los factores que conspiran contra la nacionalidad», «los partidos comunista y

socialista», sino desde mucho antes, desde 1964, cuando «la Democracia Cristiana, un partido que tiene claras vinculaciones internacionales que lo pueden hacer antipatriótico, dejó en libertad las fuerzas del desquiciamiento con la sindicalización campesina, la reforma agraria sobrepasada y su populismo que soliviantó las aspiraciones del pueblo, con un deslumbramiento que atentó contra el orden».

No decían tampoco que los generales pensaban que, por eso mismo, porque el proceso de «desquiciamiento» había sido tan largo, ya todo el cuerpo de nuestra sociedad está corrompido por falta de «unidad nacional». Que habían sido los «políticos de todos los partidos» los que, por afanes electorales o por deseos de aparecer como «progresistas y avanzados», se constituían en los verdaderos responsables de la situación y que, por esta razón, el país necesitaba «un saneamiento total». Tampoco decían que los generales chilenos estimaban correcta la apreciación de los generales del Pentágono de que «las Fuerzas Armadas eran la única organización coherente, nacionalmente uniforme, que podía emprender la tarea de la reconstrucción del país»; y que no había ninguna combinación política civil que estuviera en condiciones de emprender una tarea, después de derrocado Allende, que llegara a la meta de desarticular todos los factores del «desquiciamiento»; es decir, la organización sindical obrera y campesina, las juntas de abastecimientos y control de precios, consejos campesinos, consejos comunales, cordones industriales y partidos políticos de izquierdas.

En suma, los generales en contacto directo con el Pentágono estaban de acuerdo en los siguientes puntos principales:

1) El Gobierno que reemplazara al de Salvador Allende debía ser solamente militar, con la inclusión de las tres armas y de Carabineros.

2) Este nuevo Gobierno debía buscar apoyo en los civiles solamente considerándolos como técnicos en materias específicas, y no como miembros de partidos políticos.

3) Todas las ideologías «foráneas» deberían ser erradicadas de Chile, con la acción «moralizadora» de las Fuerzas Armadas.

4) La crisis económica tenía una sola salida: la de que todos los chilenos se pusieran a trabajar, sin tener ninguna oportunidad de participar en discusiones políticas, y que los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, prestaran un sustancial apoyo financiero.

5) Para conseguir ese apoyo financiero había que dar «segu-

ridades al capital extranjero», comenzando por discutir una compensación «razonable» a las compañías norteamericanas del cobre, cuyo mecanismo podría ser anulando el descuento de las rentabilidades «excesivas» planteadas por Allende. (Esto significaba que se dejaba de restar 774 millones de dólares a las indemnizaciones fijadas en octubre de 1971. Es decir, Chile debería pagar a la Anaconda y la Kennecott una cantidad cercana a los 500 millones de dólares.)

La segunda parte de las discusiones de los generales en la primera y segunda semanas de marzo de 1973, estuvo centrada en cómo llevar a la práctica esas ideas.

Como primera medida, se estableció la de iniciar una labor de «convencimiento» de los generales «constitucionalistas» que todavía seguían apoyando la tesis del comandante en jefe, general Carlos Prats, de «ir forzando las cosas hasta llegar a un Gobierno de Salvador Allende con las FF.AA.». Carlos Prats había informado al cuerpo de generales, en múltiples ocasiones, sobre todo a partir de octubre de 1972, que «hace falta esperar un poco. El presidente Allende ha dicho en reiteradas ocasiones que está aburrido ya de los partidos que lo acompañan, porque no son capaces de dirigir al pueblo por el camino del orden social y la dedicación al trabajo». Carlos Prats expresaba su opinión, a los mandos que se la quisieran escuchar, que el presidente Allende «está llegando a un punto en que se quedará solo, y no tendrá más alternativa que gobernar con las Fuerzas Armadas». Carlos Prats había informado, pocos días antes de las elecciones de marzo que, a su manera de ver, «Allende es un brillante político, de muy buenas intenciones, que desea lo mejor para su pueblo y que tiene la decisión total de impedir una insurrección sangrienta, ya sea de parte de los extremistas de derecha como de los extremistas de izquierda».²

Para los generales «reformistas» y «duros» todas estas informaciones del comandante en jefe del Ejército no eran más que justificaciones para «sus ambiciones personales». Lo que Carlos Prats deseaba, según estos altos mandos militares, es transformarse en el «delfín» de Allende, llegar a 1976 como el candidato presidencial de los partidos de izquierda. Las ambiciones personales «están haciéndole traicionar a la institución», argumentaban personajes como Manuel Torres de la Cruz.

Entonces, todo les indicaba que era correcto dejar fuera de juego a su comandante en jefe, aislarlo de sus simpatizantes en el cuerpo de generales, y sacarlo del buque en el momento in-

dicado para dar el golpe y derrocar a Allende. En ese momento, el general Augusto Pinochet Ugarte, jefe del Estado Mayor y segunda antigüedad del Ejército, aparecía como «constitucionalista», y los conjurados decidieron centrar sobre él la mayor fuerza de las presiones para conseguirlo como aliado, sobre todo para evitar el efecto de debilidad que tendría el insurreccionar a las Fuerzas Armadas descabezando a las dos antigüedades más altas del Ejército.

Del mismo modo, se acordó «trabajar» a los mandos de Carabineros, y se eligió a César Mendoza Durán, como «el primer contacto», ya que había demostrado tener una alta capacidad de odio respecto a Salvador Allende y un neto repudio «a los marxistas».

Respecto a su participación en el Gabinete de Salvador Allende, estimaron que había que pedirle que formara uno sin militares, presentándole la idea de que «ya las Fuerzas Armadas cumplieron con el propósito de garantizar unas correctas elecciones generales y de pacificar los ánimos a partir de octubre pasado». Pero, al mismo tiempo, decidieron dejar en sus puestos a los demás militares que estaban en cargos estatales de responsabilidad con un doble objetivo: el de mantener información fresca «y oportuna» sobre las maniobras internas de los altos funcionarios de la Unidad Popular, y anular influencia en la tropa de los mandos leales a Salvador Allende, que habían mostrado sus simpatías «extremistas» a partir de octubre de 1972; y que, como en el caso del general de aviación Alberto Bachelet Martínez, nombrado por Allende en la Secretaría Nacional de Distribución, estaban «dando un mal ejemplo de lealtad a los extremistas» al conceder entrevistas en las que se avalaban las ideas de quienes pensaban que las Juntas de Abastecimientos y Control de Precios, formadas por «el populacho», debían ser quienes controlaran la buena distribución de los alimentos en el país. (El general Bachelet fue apresado el día 11 de septiembre, cuando se presentó al Ministerio de Defensa, llevado al campo de torturas de la aviación en la base aérea de Los Cerrillos hasta octubre, y en seguida trasladado a la Cárcel Pública, donde murió el 12 de marzo de 1974, al no poder recuperarse del brutal castigo físico a que fue sometido por los equipos de interrogadores de la Fuerza Aérea chilena.)

Cuando los generales en contacto con el Pentágono estaban discutiendo estos detalles de su operación para derrocar a Allende, los principales mandos de tropas del Ejército, espina

dorsal del complot, estaban distribuidos de la siguiente forma. De norte a sur:

División Blindada, con asiento en Iquique, de la provincia de Tarapacá. Comandante de división el general de brigada Carlos Forestier Haebggen, del grupo de los «duros».

Primera División, con sede en Antofagasta, provincia de Antofagasta. Comandante de división el general Joaquín Lagos Osorio, del grupo de los «constitucionalistas» y entusiasta partidario de la tesis del general Carlos Prats González de formar un Gobierno Allende-FF.AA.

Segunda División, con asiento en Santiago, provincia de Santiago. Comandante en jefe el general de brigada Mario Sepúlveda Squella, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, del grupo de los generales «reformistas», violento partidario de la desaparición de los políticos civiles de todos los colores, pero con serias contradicciones con otros generales «reformistas», como Herman Brady Roche, en la lucha por el liderato de la situación, lo que le hacía acercarse al general Carlos Prats. Era, junto con el general Guillermo Pickering, jefe de los Institutos Militares, el único «reformista» que planteaba abiertamente que «el derrocamiento debe darse en dos etapas» —la primera un Gobierno Allende-FF.AA., y la segunda con las Fuerzas Armadas solamente—, «a fin de evitar un derramamiento de sangre inútil». El general Sepúlveda Squella era, al mismo tiempo, comandante en jefe de la guarnición de Santiago, que comprende ocho regimientos. De ellos, la Escuela de Suboficiales, el Regimiento Blindados Número 2 y la Escuela de Telecomunicaciones, estaban comandadas por coroneles del grupo de los «duros»; la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales, por un coronel «reformista»; y la Escuela de Infantería, los regimientos Buin, Tacna y Ferrocarrileros de Puente Alto, por coroneles «constitucionalistas».

Tercera División, con asiento en la ciudad de Concepción, provincia de Concepción. Comandante en jefe el general de brigada Washington Carrasco Fernández, del Servicio de Inteligencia Militar, del grupo de los generales «reformistas» y ligado estrechamente al Pentágono.

División de Caballería, con asiento en la ciudad de Valdivia, provincia de Valdivia. Comandante en jefe el general de brigada Héctor Bravo Muñoz, aparentemente del grupo de los «constitucionalistas» pero, de hecho, en el grupo de los «reformistas», haciendo el juego de infiltrado en el primer grupo, mo-

tivado por razones de ambición personal. Era otro de los comandantes de división en estrecho contacto con el Pentágono.

Quinta División, con asiento en la ciudad de Punta Arenas, provincia de Aisén. Comandante en jefe el general de división Manuel Torres de la Cruz, del grupo de los «duros», virtual jefe de éstos, mientras aparecía como «amigo personal de Allende» y «gran apoyo» para el general Prats. Torres de la Cruz sería encargado de «experimentar» en su división la actuación conjunta de Ejército, Fuerzas Aéreas, Marina y Carabineros contra las organizaciones obreras, vistiendo las operaciones del inocente ropaje de «allanamientos en busca de armas para cumplir la ley sobre control de armas y explosivos».

Como se ve, ya en la primera quincena de marzo de 1973, la alianza de los grupos «reformista» y «duro», más la posición personal del «constitucionalista» Bravo Muñoz, daba un abrumador dominio a los generales que habían decidido decir *okey* al Pentágono y derrocar a Salvador Allende.

Por eso no sorprende la tranquilidad con que los conspiradores tomaron la tarea, y la lentitud con que fueron montando una a una todas las piezas de su maquinaria infernal para dejarla caer sobre el pueblo de Chile en el momento preciso. Actuaban sobre seguro.

Y tanta fue su tranquilidad, que pudieron llegar al perfeccionismo de actuar con los políticos civiles que los estaban empujando al golpe desde 1970, haciéndoles creer que ellos, los generales eran un instrumento de esas figuras políticas. El caso que revela toda la dimensión de lo que afirmo es el de Eduardo Frei Montalva, jefe de la fracción más reaccionaria de la Democracia Cristiana. Los generales actuaron en forma tan impecable en este sentido, que Eduardo Frei, aun dos o tres semanas después del golpe del 11 de septiembre, estaba convencido de que al derrocamiento de Allende seguirían rápidamente las elecciones y él sería el candidato de «salvación nacional». Con este propósito Eduardo Frei trabajó hasta el agotamiento desde el Senado de Chile, donde llegó con las elecciones del 4 de marzo de 1973, para convencer a los generales que derrocaran a Allende. Los generales, durante la conspiración, le hicieron creer que así era en efecto, y obtuvieron lo que querían: apoyo masivo de las organizaciones controladas por esos grupos políticos reaccionarios. Fueron tremendas las alabanzas que en los primeros días después del golpe hicieron a los «militares salvadores de la Patria» los políticos, organizaciones y perio-

distas demócratacristianos. Dieron discursos, se pasearon por el mundo y escribieron libros para alabar a los «héroes con uniforme». Sólo meses después, ya en diciembre, se dieron cuenta con angustia de que habían sido utilizados por los generales, que estaban fuera del juego y, lo más horrible, que habían estado glorificando a un grupo de personas que dirigían una carnicería humana contra centenares de miles de chilenos. Carnicería tan enorme que tenía horrorizado al mundo. Se dieron cuenta que cada palabra escrita en favor de los militares después del 11 de septiembre, equivalía al cadáver de un civil chileno, a una mujer violada por la soldadesca, los oficiales e incluso por mandos de altísima graduación, a un hombre castrado con bayoneta, a un cadáver flotando sobre el río Mapocho con las manos atadas a la espalda y la huella de una ráfaga de ametralladora en su pecho, a un Salvador Allende asesinado con planificación fría, a un Pablo Neruda dejado morir por negársele atención médica, durante cinco días, para que ocurriera específicamente eso: que muriera.

Ahora o nunca

Pero no fueron sólo los altos mandos militares chilenos los que se reunieron rápidamente después de la noche del 4 de marzo de 1973. Los dirigentes máximos de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio también lo hicieron. Y en sus reuniones, la tesis que habían planteado después del paro de octubre de 1972, quedó reconfirmada, La tesis de que «es imposible derribar a Salvador Allende por medios constitucionales». Es decir, que el fracaso de los políticos tipo Frei y Jarpa para cumplir con el encargo de la oligarquía y el imperialismo norteamericano, demostrado en octubre, había vuelto a demostrarse en marzo.

Se decidió entonces concentrar todos los esfuerzos en empujar a las Fuerzas Armadas contra Allende. Los monopolistas industriales, comerciales, financieros y agrícolas de Chile razonaron de dos maneras:

1) Solamente si hay un verdadero caos económico, político y social las Fuerzas Armadas se verán obligadas a intervenir y depondrán a Allende.

2) Una vez depuesto Allende, las Fuerzas Armadas se encar-

garán de mantener el orden social, político y económico y nosotros planificaremos una nueva forma de desarrollo del país.

El día 28 de marzo —veinticuatro horas después de que Salvador Allende admitiera la sugerencia de los generales y cambiara de nuevo la composición de su Gabinete, sacando de él a los representantes de las Fuerzas Armadas—, Orlando Sáenz, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, hace publicar en «El Mercurio» su intervención de dos días antes como memoria anual de su gestión, en la que se encuentran las líneas generales de los razonamientos aprobados.

Sáenz dice que «la salida de las Fuerzas Armadas del Gabinete» prueba que «ellas han repudiado al Gobierno», porque significa el caos para una nación y eso atenta contra su seguridad y soberanía. Dice que «el propósito de los marxistas» es «destruir a Chile», de modo que no hay que extrañarse de la gravísima crisis económica que afecta al país, Y señala que la única salida es un Gobierno «integrador», «fuerte y eficaz», que «haga del Estado un árbitro, pero no un monopolista que asfixie», que tenga la participación activa del «poder gremial», es decir, de las organizaciones de grandes empresarios. Con vocación de profeta, Orlando Sáenz indica que es importante «estar preparados» porque los días que vendrán serán muy difíciles, graves y críticos; en ellos «se decidirá quién triunfa en Chile, si el caos marxista o la democracia». Pide a todos los «demócratas» del país luchar sin descanso, sin tregua, hasta vencer al marxismo», y señala el buen deseo de que «el Presidente de la República escuche nuestras voces».

Pero ésta era sólo la forma pública, o publicable en un periódico como «El Mercurio», cabeza de serie de la conspiración civil, de algo mucho más concreto. Orlando Sáenz, en representación de la Sociedad de Fomento Fabril, había pedido a Eduardo Frei, que a fines de mayo sería elegido Presidente del Senado de Chile, y por lo tanto en «la línea de sucesión de Allende» si éste era declarado «inhábil» para el cargo por el Congreso, que cumpliera una tarea especial, en cooperación con su ex ministro de Defensa, Juan de Dios Carmona. La tarea era entrar en conversaciones «precisas, francas y directas» con el general Oscar Bonilla Bradanovic para formar un esquema de derrocamiento de Allende y para pedirle que él, como «buen amigo de ambos», hablara con los generales Carlos Prats y Augusto Pinochet para plantearles las mismas ideas.

Por su parte, Jorge Fontaine, en representación de la Con-

federación Nacional de la Producción y el Comercio, se contactó con los políticos nacionales Onofre Jarpa, presidente de ese partido; Patricio Phillips y Pedro Ibáñez Ojeda, todos senadores, para que «se acerquen» al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, César Ruiz Danayau; al comandante de la Primera Zona Naval, vicealmirante José Toribio Merino; y al general de división Manuel Torres de la Cruz.

Se les dijo a estos políticos que había que hablarles con franqueza a los generales y almirantes, y garantizarles una «gran campaña publicitaria» en favor de «un Gobierno de las Fuerzas Armadas». Que ellos (la Sociedad de Fomento Fabril y demás organizaciones empresariales) pondrían en práctica la difusión de la idea «poder militar» en contra de la de «poder popular». Que se encargarían de crear dificultades constantes de transporte, comercialización y producción, de tal manera que el aparato productivo nacional se paralizaría completamente. Que, siguiendo las instrucciones que los generales pudieran dar, ellos, pondrían sus órganos de prensa («El Mercurio», Canal 13 TV de la Universidad Católica, radios Minería, Balmaceda, Cooperativa, Sociedad Nacional de Agricultura, etc.) para «desprestigiar» a quienes ellos desearan, y «prestigiar» a quienes quisiesen, si eso ayudaba a los propósitos finales.³

También se les dijo que garantizasen a los generales «un rápido aumento en el desprestigio de Allende entre los trabajadores», porque las organizaciones sindicales controladas por los partidos demócratacristiano y nacional «promoverán un aumento de las huelgas exigiendo mayores salarios y sueldos».

Pero no sólo con los políticos hablaron los dirigentes de la oligarquía chilena. Hablaron también con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Urrutia Manzano, latifundista expropiado y accionista de media docena de monopolios industriales. Le pidieron que iniciara una campaña de declaraciones para poner en duda «la legalidad» de las actuaciones del Gobierno, y que hablara con «los mandos militares que usted pueda», para influirlos en una decisión que «sirva para librarnos del Gobierno de Allende». Lo mismo hicieron con el controlador general de la República, Héctor Humeres, para que redoblara sus esfuerzos en declarar fuera de la ley todas las adquisiciones, requisiciones o intervenciones en las industrias monopólicas por parte del Estado.

El último día de marzo de 1973, una vez más, la oligarquía chilena y el imperialismo de los Estados Unidos habían puesto

a todos sus peones en el punto de partida para una nueva carrera contra el Gobierno constitucional de Chile. Pero, al revés que en ocasiones anteriores, ahora estaban realmente **TODOS** los peones del sistema en el punto de partida.

Róbinson Rojas, "Estos mataron a Allende. Reportaje a la masacre de un pueblo", 1974

1. La intromisión del Pentágono en los esfuerzos de la oligarquía chilena para derrocar a Allende fue denunciada por Julio Zapata Bernaldes, en una serie de artículos en el suplemento dominical de «Puro Chile», en diciembre y enero de 1972 y 1973 respectivamente, titulados: *Anatomía de un golpe de Estado, Cómo la gran burguesía quiere derrocar a Allende, El fascismo como técnica del golpe de Estado, Estados Unidos detrás de Frei y Jarpa, La Sociedad de Fomento Fabril y El imperialismo golpe*. Estos reportajes revelaban la orientación general de las instrucciones de aislar al general Prats, dejar en segundo plano a los políticos, crear el «poder gremial», base del fascismo, y llevar a los altos mandos militares a formar un bloque conspirativo. La revista «Punto Final», de marzo y abril de 1973, retomó estas denuncias acerca de los planes del Pentágono. En julio de 1973, después de que el día 20 de ese mes el general Washington Carrasco viajó a Santiago para hablar con su comandante César Guevara Fuentes y quince oficiales más de un esquema para que «Santiago pueda ser atacado por aviones desde La Serena, Quintero y Concepción», salieron a la luz pública más detalles de la intromisión del Pentágono (publicados en «Chile Hoy», de agosto y septiembre de 1973).

2. En octubre de 1972, a propósito de la táctica a seguir para derrotar la conspiración patronal, se produjo la primera crisis entre las directivas del partido comunista y el partido socialista, y entre Carlos Altamirano y Salvador Allende, dirigentes máximos de los socialistas. Allende entendía que Altamirano se desbarrancaba por el «ultraizquierdismo», y lo hacía saber en alta voz a quien quisiera escucharlo. Esto se reflejó en violentísimos ataques personales a Carlos Altamirano, desde el diario «Puro Chile», en noviembre y diciembre de 1973, por columnistas y redactores simpatizantes de Allende y de la directiva del partido comunista. En enero de 1973, a propósito de una discusión sobre las Juntas de Abastecimientos y Precios (organizaciones populares para controlar la especulación y la distribución de los alimentos) con el ministro de Hacienda Fernando Flores, el Presidente gritó, delante del equipo de prensa de «La Moneda», que los partidos de la UP le tenían aburrido, que eran «una bolsa de gatos» y que no sabían guiar al pueblo. Desde meses antes, a partir de la crisis de diciembre de 1971, por la marcha de las ollas vacías montada por la derecha, Allende había expresado semipúblicamente estas mismas ideas, lo que aprovechaban los diarios de derecha, especialmente «La Tribuna», para incluso titular en primera página sobre el tema (*Allende hasta la coronilla con la UP*, de «La Tribuna», primera semana de septiembre de 1972). Tal vez por estas circunstancias, el general Prats opinó ante sus colegas militares que Allende estaba a punto de «estar maduro» para unirse con las Fuerzas Armadas en su Gobierno. Sin embargo, los hechos posteriores demostraron que el Presidente nunca tuvo esa intención, aun cuando sus declaraciones públicas pudieran inducir a pensar lo contrario. Sobre esta crisis de conducción y trizadura en la cúpula de la Unidad Popular, hay mayor material de juicio en el capítulo quinto de este libro.

3. A partir de abril de 1973, los diarios «El Siglo», «Ultima Hora», «Puro Chile», y las revistas «Punto Final», «Chile Hoy», «De Frente» y «El Rebelde» denunciaron constantemente las andanzas conspirativas de Juan de Dios Carmona, Patricio Phillips, Eduardo Frei y Pedro Ibáñez; y de los generales Óscar Bonilla y César Ruiz Danyau, además del almirante Marino. La situación llegó a su clima en agosto de 1973, cuando Allende aceptó el retiro de Ruiz Danyau y se decidió a pedir el retiro de Óscar Bonilla junto a otros cinco generales y del almirante Merino en la segunda quincena de septiembre. Pero el golpe vino antes. Ver el documento de Joan Garcés, ya citado, y el detalle de estos sucesos en el capítulo quinto de este libro.